

Ser joven hoy. El reto de la inclusión. El reto de la nueva ciudadanía.

*The Being young today. The challenge of inclusion.
The challenge of the new citizenship.*

Autor: **Joan Subirats Humet**

Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona

joan.subirats@uab.cat

Resumen

Vivimos una fase de transición donde la diversificación social la heterogeneidad de los problemas crecen sin cesar y donde los jóvenes, en busca de su propio lugar en la sociedad, ven con preocupación e incertidumbre su futuro. Todo ello, hace necesario repensar la realidad a partir de una concepción plena de ciudadanía, en la que podamos caber todos, sea cual sea nuestra edad, género u origen. El factor esencial de la lucha contra la exclusión hoy día pasa por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o colectivos afectados por dinámicas o procesos de exclusión social. Y eso, en el caso de los jóvenes, quiere decir capacidad de empoderarse, de asumir protagonismo tanto en el diagnóstico como en las vías de solución.

Palabras clave: Ciudadanía, jóvenes, inclusión y exclusión social, autonomía, diversidad

Abstract

We are living a transition stage where the social diversification and the heterogeneity of problems increase continuously and where young people, in a search of their essential own place in society, look at their future with worry and uncertainty. All this makes it necessary to re-think the reality based on a conception of full citizenship, in which we may all fit whatever our age, gender, or origin. The essential factor of the fight against exclusion nowadays must go through a reconquest by the people or collectives affected by dynamics or processes of social exclusion of one's own vital destinies. And this, in the case of the young people, means having the capacity of empowering one's self, of assuming a leading role in the diagnosis as well as in the paths to solution.

Key words: Citizenship, youth, social inclusion and exclusion, autonomy, diversity

Introducción

Nuestra sociedad ha cambiado muy profundamente en muy pocos años. Y esta revista, y la preocupación que late detrás de ella, nos lo demuestran. ¿Cómo afrontar el gran cambio de época que nos ha tocado vivir? ¿Cómo tratar de ser útiles en el debate sobre la realidad que viven los jóvenes y adolescentes? Los principales parámetros socioeconómicos y culturales que fundamentaron durante más de medio siglo la sociedad industrial están quedando atrás. Asistimos a una época de transformaciones de fondo y a gran velocidad. El cambio predomina sobre la estabilidad, miremos donde miremos. Los mecanismos que habíamos construido colectivamente para evitar situaciones de exclusión, se ven hoy amenazados. Y así, los instrumentos de análisis y reflexión que apoyaron nuestra interpretación del estado de cosas anterior (el llamado estado fordista, estado industrial o estado del bienestar) resultan cada vez más obsoletos.

Cuando hoy en el mundo se habla de jóvenes, de adolescentes, hay una referencia a un momento de la vida. A una etapa de un ciclo vital. La sociedad industrial mantenía entre sus muchas certidumbres, la de una estructura vital en la que los hitos entre sus distintas etapas estaban perfectamente determinados. Formación, trabajo y descanso, se sucedían sin traumas, y permitían, por ejemplo, que la literatura dedicada a los temas gerontológicos dijera no hace muchos años que: “el arte de envejecer es el arte de quedarse solo; es pedir cada vez menos a la vida”, o que se pudiera distribuir edades y tareas: “Cada edad tiene su propio quehacer: hasta los veinte la edad de los sueños, a los 20 la edad de los proyectos, a los 40 la edad de los programas, a los 60 la edad de los balances, y a los 80 la edad de los recuerdos”¹. Ha cambiado el sistema productivo, han cambiado las formas de vida, y han saltado por los aires las rigideces vitales anteriores.

No obstante, de manera más o menos automática, seguimos manejando criterios de diferenciación de edades en los que distinguimos a las personas entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero, al mismo tiempo, cada vez resulta más difícil definir con precisión cuándo empieza o acaba la juventud, cuándo se deja de ser adulto y se empieza a ser persona mayor, o cómo distinguir entre las distintas fases de la vejez. La lógica de diferenciación entre edades tenía una vinculación directa con las necesidades del sistema económico, y por tanto respondían a las exigencias productivas y a la estructura de clases propias de la sociedad industrial. Uno dejaba de ser joven cuando se incorporaba al trabajo fabril, y empezaba a ser viejo cuando dejaba de ser útil productivamente hablando. Pero, las diferencias de clase provocaban que unos siguieran estudiando muchos más años que otros, o que trabajos de carácter más intelectual pudieran prolongarse mucho más que aquellos cuya labor tenía componentes de fuerte desgaste físico.

Ahora estamos en plena fase de transición entre un sistema productivo-industrial que en Europa ha entrado en declive definitivo y una nueva forma de producir, relacionarse y vivir que ya despunta, pero de la que aún no tenemos datos definitivos. Son momentos de interregno en los cuales lo antiguo tarda en morir y lo nuevo tarda en consolidarse, y en los que muchas concepciones y paradigmas bien enraizados pueden acabar convirtiéndose en lo que Ulrich Beck denomina “conceptos zombies”. En esta fase de transición, los hitos vitales marcados por edades “fetiches”, que nos habían ido siendo útiles, se adaptan ahora mal a las nuevas circunstancias, y por ello los vamos moviendo sin orden ni concierto. La educación obligatoria da inicio a los 6 años, pero hemos ya universalizado la fase de 3 a 6, y poco a poco vamos aceptando que la escolarización puede

¹ Imsero, Envejecer en el año 2000, Madrid.

empezar a los 0 años, a pesar de los evidentes problemas que ello puede conllevar. Habíamos utilizado los 18 años como entrada en la fase adulta, pero hemos ido moviendo esa edad cuando nos ha convenido por razones electorales, penales o para marcar el momento de finalizar o no los estudios obligatorios. En algunas comunidades autónomas se considera "jóvenes" a los que tienen 35 años, si se trata de acceder a las ofertas de vivienda protegida, pero la "juventud" puede llegar a alcanzar los 45 años si los demandantes de subsidios son agricultores en busca de ayuda para la puesta en marcha de ciertas explotaciones. La crisis económica y productiva, y la drástica reforma de hecho del mercado de trabajo (puestos precarios y con alta rotación y corta temporalidad para jóvenes, contratos indefinidos y estables para mayores pero muchos incentivos para adelantar la jubilación), están provocando una brusca reducción de la fase adulta. Y en los 55 o 60, empieza para muchos una larga trayectoria marcada por la diversidad de situaciones y en muchos casos, la falta de un sentido claro de qué esperan ellos de la vida o de qué espera la sociedad de ellos.

En el fondo, ese conjunto de variaciones, cambios y diversificaciones, demuestran que desde las instituciones públicas responsables de articular e instrumentar las políticas y los programas de actuación que traten de dar respuesta a los problemas sociales y personales, lo que se busca es identificar bien el problema y tratar de personalizar la propuesta de apoyo o ayuda. Lo complejo del tema reside en que la diversificación social y la heterogeneidad de los problemas crecen sin cesar, y la capacidad de adaptación de las administraciones públicas, encorsetadas en rutinas procedimentales y con lógicas normativas forzosamente homogeneizadoras, es sin duda limitada, sobre todo en momentos como los actuales en que los recursos disminuyen y las perspectivas de mejora de los mismos no parecen halagüeñas.

Existe una clara contradicción entre los cambios acelerados a los que estamos sometidos, y la tenacidad con la que mantenemos una letanía de prejuicios sobre un conjunto de temas que ya no son, ni de lejos, lo que eran hace sólo unos años. Asimilamos, por ejemplo, fase adulta y ancianidad con decadencia física e intelectual. Y mantenemos horizontes temporales sobre este tema, que son día a día desmentidos por la tozudez de las cifras de esperanza de vida, de alargamiento de los ciclos vitales e intelectuales, o con la constante presencia de personas adultas y mayores activas en todo tipo de actividades y procesos. Descubrimos cada día que las personas llegan a edades notablemente avanzadas manteniendo altas dosis de adaptación y de flexibilidad ante los cambios. Y, como ya hemos dicho, tenemos crecientes dificultades para ubicar los hitos vitales que distinguen a niños de jóvenes, a jóvenes de adultos, o adultos de mayores, cuando además todo ello se complica según hablemos de hombres o de mujeres, de personas que viven en grandes ciudades o en zonas de baja densidad, o si se trata de personas con trayectoria laboral más o menos centrada en esfuerzos físicos y manuales.

Mantenemos asimismo estereotipos de especialización laboral-familiar que nos funcionan cada vez menos. Y seguimos especulando con continuidades y permanencia laborales que son más y más infrecuentes. Todo lo que rodea al tema de las edades, rápidamente se conecta con familia, trabajo, movilidad, cuidado, servicios,..., y por tanto, "empapa" el conjunto de fases vitales de cualquier individuo. Y todo ello ha estado sometido a profundas transformaciones en los últimos tiempos. La resultante es una evidente heterogeneidad en las situaciones más básicas de trabajo, cuidado, aprendizaje y descanso. El propio cambio tecnológico, que está en la base de muchas de las grandes transformaciones que hemos descrito, muestra bien la mezcla de amenaza (de exclusión digital) y de oportunidad (acceso a nuevas posibilidades, nuevas capacidades de formación y acción) que rodea el cambio de época y el universo vital de las personas.

Hemos ya mencionado que mantenemos desde hace tiempo una concepción de la vida muy vinculada al trabajo. Un trabajo estructurador y estable. Un trabajo al que se consagraba la fase inicial de la formación y el aprendizaje, y del que uno salía ya casi al final de la existencia vital. Se ha usado la metáfora de las dos estaciones, verano e invierno, para caracterizar ese relato anterior de las trayectorias vitales que se configuraban desde y para el trabajo. En estos momentos, este relato resulta simple y empobrecedor en relación con trayectorias vitales mucho más complejas, heterogéneas y diversificadas. Manteniendo el símil de las estaciones, vemos cómo asume una importancia creciente la primavera como fase constitutiva del aprendizaje, anticipando adolescencia y expandiendo la juventud hacia fases que antes eran consideradas plenamente de adultos. Y necesitamos la expansión del otoño para poder encuadrar el significativo alargamiento de la vida, y la diversificación de espacios de trabajo, cuidado, aprendizaje y ocio que surgen y se multiplican en esa nueva madurez vital. Sabiendo, además, que las estaciones y sus transiciones nunca funcionan de manera automática ni maquinal, y que constantemente asistimos a mutaciones del tiempo y del clima que no dejan de sorprendernos.

Las carencias y estrecheces del relato hasta ahora hegemónico, ha situado a los jóvenes, en definitiva, como personas en formación, sin autonomía completa, necesitadas de atención y cuidado, con problemas de adaptación a un mundo al que tenían que incorporarse y que se tomaba como un dato. Con estos mimbres, no resulta extraño que las políticas públicas que se orientan a este gran colectivo de personas resulten hoy esencialmente obsoletas y pocas satisfactorias para sus destinatarios. Es asimismo cierto, que ha ido surgiendo otro relato, no menos insatisfactorio por simplista, que sería el de la juventud dorada. Los jóvenes, desde esa perspectiva, tendrían ante sí todo tipo de nuevas oportunidades, serían "los exploradores del nuevo mundo", que podrían empezar de nuevo en cuanto quisieran, innovando, emprendiendo, experimentando y triunfando. Es evidente, que ese tampoco es un relato que refleje la realidad multiforme y muy desigual de los jóvenes en cuanto a recursos económicos, cognitivos o relacionales.

Necesitamos repensar con ellos y ellas estas percepciones, tratando de recomponer a las personas en su plenitud, superando la fragmentación de problemas y respuestas, y evitando tanto la infantilización (jóvenes como eternos inmaduros, necesitados de protección) como la ilusión de un proceso de maduración instantáneo (irreal y parcialmente sólo accesible a unos pocos). La manera de repensar esa realidad precisa partir de una concepción plena de ciudadanía, en la que podamos caber todos, sea cual sea nuestra edad, género u origen.

¿Repensar la ciudadanía?

Partimos pues de la necesidad de disponer de una perspectiva de ciudadanía y de sociedad en la que podamos estar todos. Cada uno desde su propia especificidad y dignidad. Y ello implica reconocer las especificidades que implican edades distintas, opciones afectivo-sexuales distintas, creencias y pautas culturales distintas, capacidades y género diferenciadas,...

La perspectiva política, económica y social del pacto que significó el surgimiento del Estado de Bienestar y que consolidó años de reclamación de derechos sociales, se basaba en el trabajo como la clave de bóveda que possibilitaba el acceso a casi todo, y también a la condición de adulto. El trabajo era, en el siglo XX, una situación casi siempre asociada a una dependencia del trabajador hacia el empresario. Un trabajo generalmente estable y continuo en el tiempo. Hoy, el

trabajo es cada vez más autónomo o no dependiente, intermitente y precario. Y ese tremendo cambio lo modifica todo. Y lo modifica de manera más sustancial para los jóvenes, para aquellos más afectados por esa alteración rápida y profunda.

Recordemos muy brevemente las dimensiones del cambio social en marcha, como requisito para entender el paso del concepto de juventud que estábamos usando hacia la idea compleja y emergente de ciclo vital que deberíamos empezar a usar. Desde el punto de vista productivo, el impacto de los grandes cambios tecnológicos ha modificado, como bien sabemos, totalmente las coordenadas del industrialismo. Se han superado las estructuras fordistas, aquellas en las que grandes concentraciones de trabajadores eran el núcleo central para la producción de ingentes cantidades de productos de consumo masivo a precios asequibles, sobre la base de una organización del trabajo en cadena y a costa una notable homogeneidad en la gama de bienes producidos. Lo que hemos denominado como globalización o mundialización económica, construida sobre la base de la revolución en los sistemas de información y de movilidad, ha permitido avanzar hacia un mercado mundial, en el que las distancias cuentan menos, y donde el aprovechamiento de los costes diferenciales a escala planetaria ha desarticulado empresas y plantas de producción. Palabras como flexibilización, adaptabilidad o movilidad han reemplazado en especialización, estabilidad o continuidad. La diversificación en el consumo ha acompañado a la diversificación social, y la calidad se ha situado en la capacidad de acercar producción a opciones muy diversas.

Sabemos que la sociedad del conocimiento busca el valor diferencial, la fuente del beneficio y de la productividad en el capital intelectual frente a las lógicas anteriores centradas en el capital físico y humano. Pero sabemos también que la creciente financiarización de la economía, y la capacidad de generar outsourcing y deslocalización de los procesos productivos, ha propiciado la llegada al mercado global de grandes contingentes de nuevos trabajadores, que compiten en nuevos espacios de producción en todo el mundo y desde posiciones salariales y condiciones sociales más precarias, con los colectivos de trabajadores de las áreas tradicionalmente más desarrolladas. Todo ello sitúa en peores condiciones a los trabajadores menos formados, a aquellos que, como los jóvenes, todavía no han entrado en el mercado de trabajo, a aquellos que viven en los países donde las condiciones laborales han sido tradicionalmente más protegidas, tras decenios de lucha y de conflictos.

Lo que parece estar en juego es la propia concepción del trabajo como elemento estructurante de la vida, de la inserción y del conjunto de relaciones sociales. En definitiva, el capital se nos ha hecho global y permanentemente movilizable y movilizad, mientras el trabajo sólo es local, y cada vez es menos permanente, más condicionado por la volatilidad del espacio productivo. Desde el punto de vista de la estructura social, la sociedad industrial, nos había acostumbrado, al menos en la experiencia europea, a estructuras relativamente estables y previsibles. Hemos asistido en poco tiempo a una acelerada transición desde esta sociedad hacia una realidad compleja, caracterizada por una multiplicidad de ejes cambiantes de desigualdad. Si antes las situaciones problemáticas se concentraban en sectores sociales que disponían de mucha experiencia histórica acumulada referente a las condiciones laborales y sociales de clase, y frente a las cuales habían ido desarrollando respuestas (como la propia idea de subsidio de paro, o como la jubilación y las pensiones), ahora el riesgo podríamos decir que se ha democratizado, castigando más severamente a los de siempre, pero golpeando también a nuevas capas y personas. Este conjunto de cambios tienen dimensiones globales, pero en España se manifiestan claramente y de forma más intensa en los últimos tiempos.

Desde el punto de vista de las relaciones de familia y de género, los cambios no son menores. El ámbito de convivencia primaria no presenta ya el mismo aspecto que tenía en épocas pasadas. Los hombres trabajaban fuera del hogar, y las mujeres asumían sus responsabilidades reproductoras, cuidando marido, hijos y personas mayores. Las mujeres no precisaban formación específica, y su posición era de dependencia económica y social. El escenario es hoy muy diferente. La equiparación formativa entre hombres y mujeres es muy alta, y por ejemplo en España, ya hay más mujeres que hombres en la universidad, y si bien hay bastantes más analfabetas que analfabetos entre los que tienen más de 65 años, hay ahora más tituladas universitarias que titulados universitarios en la franja de los 25-29 años. La incorporación de las mujeres al mundo laboral aumenta sin cesar, a pesar de las evidentes discriminaciones que se mantienen. Pero, junto a estos datos muy positivos, que muestran la recuperación para las mujeres de toda su dignidad personal, la verdad es que los roles en el seno del hogar apenas si se han modificado, aunque entre los más jóvenes y con mayor formación se apuntan nuevos formatos de relación y de dedicación. Crecen las tensiones por la doble jornada laboral de las mujeres, se incrementan las separaciones y aumentan también las familias en las que solo la mujer cuida de los hijos. Y, con todo esto, se provocan nuevas inestabilidades sociales, nuevos yacimientos de exclusión, en los que la variable de género resulta determinante.

En este contexto institucional, las políticas públicas en que se fueron concretando la filosofía del estado del bienestar, se han ido tomando poco operativas, poco capaces de incorporar las nuevas demandas, las nuevas sensibilidades. No parecen bien armadas para encarar la complejidad de los nuevos problemas y las nuevas dimensiones de los viejos dilemas. Muchas veces, desde posiciones ideológicas muy precisas, se ve el "coste" económico de estas políticas, más como un impedimento para el crecimiento que como expresión de una mayor cohesión social. Por otra parte, las políticas de bienestar se construyeron desde lógicas de respuesta a demandas que se suponían homogéneas y diferenciadas, y se gestionaron de manera rígida y burocrática. Mientras hoy tenemos un escenario en el que las demandas, por las razones apuntadas más arriba, son cada vez más heterogéneas, llenas de multiplicidad en su forma de presentarse, por lo que parecen requerir formas de gestión flexibles y desburocratizadas.

Es en este escenario complejo y lleno de preguntas sin respuesta, en el que se inscriben estas notas sobre los jóvenes. La edad, el tránsito entre formación, trabajo más o menos formalizado, el ocio o la actividad no directamente laboral, el buscar su propio lugar en la sociedad y una preocupación general por su futuro. Y todo ello en momentos en que están totalmente en duda las vías o caminos que se habían venido utilizando en estos trayectos e itinerarios vitales. Ya no es sólo un tema de recursos materiales, de recursos económicos, que también. Es asimismo un tema de exclusión, de situaciones de riesgo y de vulnerabilidad que afecta a este colectivo y que los sitúa en un terreno de incertidumbre. Sin descartar que cada vez se produzcan situaciones de vulnerabilidad y de exclusión. Las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas, los índices de riesgo presentan extensiones sociales e intensidades personales altamente cambiantes. Tampoco podemos explicar la exclusión social refiriéndonos a una sola causa. Una sencilla explotación de las estadísticas nos muestra las altísimas correlaciones entre, por ejemplo, edad, nivel de estudios o de formación, inserción laboral o participación política. O bien entre barrios guetizados, infravivienda, segregación étnica, paro, pobreza o sobreincidencia de enfermedades.

Todo ello nos lleva hacia la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial del tema de los jóvenes. Necesitamos incorporar al análisis elementos más globales, sin que ello nos impida propiciar salidas. En efecto, no se trata sólo de comprobar la posible obsolescencia de las

políticas y de las concepciones que ahora manejan las instituciones públicas y otros actores que operan en el sector de la juventud. Debemos propiciar innovaciones y salidas que mejoren la situación actual y ayuden a dar respuestas a los retos que ya tenemos. Estos problemas, estas situaciones, deben poder ser abordadas desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas. Cabe pues partir de la idea de que la situación de los jóvenes en España debe ser vista como un fenómeno cambiante, relacional, insertado en el marco de las transformaciones hacia sociedades postindustriales, y susceptible de mediaciones políticas colectivas.

Los jóvenes son personas que quieren participar activamente y de manera integral en la sociedad española. Una sociedad que encara este siglo con la preocupación de velar, de forma equilibrada y equitativa, por el conjunto de necesidades y expectativas de todas las personas sea cual sea su edad, género o condición. Estos valores y deseos contrastan con una realidad en la que más bien se considera a los jóvenes como objeto de atención, de preocupación o de amenaza, más que como sujetos dotados de autonomía plena, y mucho menos como personas capaces de desarrollar críticamente esa autonomía. Tenemos el reto de poder seguir hablando de inclusión. De poder incorporar a la ciudadanía plena ese conjunto de jóvenes que ven amenazado su futuro.

Vidas muy distintas y variadas. Inclusión y exclusión social como ejes de procesos vitales inconstantes

¿De qué hablamos cuando hablamos de exclusión? Se trata de un concepto que engloba a la pobreza pero va más allá. Cada persona, cada situación es distinta, pero existen parámetros que las acercan unas a otras. Cada historia vital, nos acerca a una situación concreta. Una situación que es el resultado de un proceso de pérdida de vínculos personales y sociales, que provoca que a una persona o a un colectivo le resulte muy difícil acceder a los recursos, las oportunidades y las posibilidades de los que dispone el conjunto de la sociedad. No puede hablarse de personas excluidas, sino de momentos o situaciones de exclusión. Acumulación de riesgos y vulnerabilidades que conllevan que en un momento determinado esa persona quede fuera de los canales habituales, y que le cueste mucho salir de ahí sin ayuda, sin contar con recursos de los que no dispone.

La exclusión social, como realidad de hecho, no es algo básicamente nuevo. Puede inscribirse en la trayectoria histórica de las desigualdades sociales. ¿Qué hay entonces de nuevo? Muy en síntesis, lo nuevo es que ya no tenemos sólo la clásica desigualdad de “los de arriba” y “los de abajo”, “los que tienen” y “los que no tienen”, sino que además tenemos situaciones diversificadas de “los de dentro”, “los de fuera”. Los que tienen vínculos, lazos, relaciones que les permiten superar conflictos y riesgos, y aquellos otros que no disponen de esos amortiguadores de vulnerabilidad, y padecen más directamente las consecuencias de ello.

Hablamos de situaciones que no afectan sólo a grupos predeterminados concretos. Más bien al contrario, afectan de forma cambiante a personas y colectivos. La distribución de riesgos sociales – en un contexto marcado por aumento de inseguridades de todo tipo– se vuelve mucho más compleja y generalizada. El riesgo de ruptura familiar en un contexto de cambio en las relaciones de género, el riesgo de descualificación en un marco de cambio tecnológico acelerado, el riesgo de precariedad e infrasalarización en un contexto de cambio en la naturaleza del vínculo laboral, el riesgo de caer en drogodependencias de las que es difícil salir, el riesgo de buscar trabajo sin

experiencia previa que te avale,..., todo ello y otros muchos ejemplos, pueden trasladar hacia zonas de vulnerabilidad a la exclusión a personas y colectivos variables, en momentos muy diversos de su ciclo de vida y que afectan especialmente a niños y jóvenes, por el momento vital en el que se encuentran. Las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas; los índices de riesgo presentan extensiones sociales e intensidades personales altamente cambiantes, y sin duda los jóvenes son un colectivo claramente expuesto.

Hablamos pues de situaciones que no se explican con arreglo a una sola causa. Ni tampoco sus desventajas vienen solas. Todo ello conduce hacia la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial de la exclusión social o de la marginación. Nadie tiene inscrito en su destino personal el ser o no excluido. Muchos de los jóvenes que hoy podemos considerar en situaciones de exclusión nos contarían historias muy distintas, a pesar de que los resultados finales sean similares. Pero ello no implica situar el tema en algo vinculado al destino de cada quién, algo inexorable. La exclusión es susceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas

¿Dónde buscamos los porqués?

Es evidente que existen factores que generan exclusión. De entrada, la diversificación étnica derivada de emigraciones de los países empobrecidos, generadora de un escenario de precarización múltiple (legal, económica, relacional y familiar). Por otro lado, la alteración de la pirámide de edades, con incremento de las tasas de dependencia demográfica, a menudo ligadas a estados de dependencia física. Y sin duda, la pluralidad de formas de convivencia familiar con incremento de la monoparentalidad en capas populares. Todo ello se suma y se añade a viejos problemas, que se presentan hoy con nuevas caras: paro estructural, gran dificultad de acceso al mercado de trabajo de los más jóvenes, drogodependencias, adicciones, reinserción después de periodos carcelarios, etc.

El trabajo es cada día más un factor de inestabilidad y de vulnerabilidad que de seguridad y certidumbre. Y todavía más cuando se consagran como habituales las diversas formas de flexibilidad-precariedad. Todo ello genera "nuevos perdedores": desempleo juvenil de nuevo tipo, estructural y adulto de larga duración; trabajos de baja calidad sin vertiente formativa; y empleos de salario muy bajo y sin cobertura por convenio colectivo.

Por otro lado, las viejas políticas redistributivas resisten mal los nuevos acuerdos de desigualdad que suenan en este inicio de siglo. Se han ido consolidando, por una parte, fracturas de ciudadanía a partir del diseño poco inclusivo de las políticas de bienestar. Por ejemplo, la exclusión de la seguridad social de grupos con insuficiente vinculación al mecanismo contributivo, o la exclusión de sectores vulnerables al fracaso escolar en la enseñanza pública de masas. Hemos ido constatando, por otra parte, el carácter fuertemente inequitativo que ha generado la falta de política de vivienda, y ello es particularmente grave en los procesos de emancipación juvenil. Este conjunto de factores no operan de forma aislada entre sí. Se interrelacionan y, a menudo, se potencian mutuamente. De hecho, las dinámicas de exclusión social se desarrollan al calor de estas interrelaciones. Y ello pone en peligro la consolidación de una concepción de ciudadanía inclusiva.

¿Quién se ocupa del tema? Responsabilidad pública y protagonismo del tercer sector

Las políticas sociales y los servicios que de ellas se desprenden tienen problemas para asumir ese nuevo potencial de desigualdad de nuevo tipo, y más en momentos de reducción de los recursos públicos en plena crisis económica y en plena huida de las obligaciones fiscales de los más poderosos, vía evasión o elusión. Partimos de tasas de cobertura e intensidad mucho más selectivas y débiles que otros países europeos, y no es extraño pues que los servicios sociales hayan tendido a orientar y focalizar su trabajo hacia los grupos de más riesgo: personas y sectores vulnerables a la marginación, o bien en situaciones abiertas de precariedad social. Parecería evidente que en sociedades complejas como las nuestras los resortes clave de lucha contra la exclusión deberían ubicarse en la esfera pública. Las políticas sociales, los programas y los servicios impulsados desde múltiples niveles territoriales de gobierno son piezas fundamentales de un proyecto de sociedad cohesionada. Ahora bien, en momentos como los actuales, nos damos cuenta de la importancia de contar con otros mecanismos de solidaridad y reciprocidad social. Las políticas sociales de los poderes públicos no pueden tener pretensiones monopolistas. Su papel como palancas hacia el desarrollo social inclusivo será directamente proporcional a su capacidad de tejer sólidas redes de interacción con todo tipo de agentes comunitarios y asociativos, en el marco de sólidos procesos de deliberación sobre modelos sociales, y bien apegadas al territorio.

Como ya hemos adelantado, cuando hablamos de exclusión social a principios del siglo XXI estamos hablando de algo distinto a la pobreza de siempre. Y ello requiere dar un giro sustancial tanto a las concepciones con las que se analiza el fenómeno como a las políticas que pretendan darle respuesta. Requiere buscar las respuestas en dinámicas más "civiles", menos dependientes de lo público o de organismos con planteamientos estrictamente de caridad. Requiere armar mecanismos de respuesta de carácter comunitario, que construyan autonomía, que reconstruyan relaciones, que recreen personas. Creemos que el factor esencial de la lucha contra la exclusión hoy día, pasa por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o colectivos afectados por esas dinámicas o procesos de exclusión social. Y eso, en el caso de los jóvenes, quiere decir capacidad de empoderarse, de asumir protagonismo tanto en el diagnóstico como en las vías de solución.

En efecto, necesitamos armar un proceso colectivo que faculte el acceso a cada quién a formar parte del tejido de actores sociales, y por tanto, no se trata solo de un camino en solitario de cada uno hacia una hipotética inclusión. No se trata solo de estar con los otros, se trata de estar entre los otros. Devolver a cada quién el control de su propia vida significa devolverle sus responsabilidades, y ya que entendemos las relaciones vitales como relaciones sociales, de cooperación y conflicto, esa nueva asunción de responsabilidades no se plantea sólo como un sentirse responsable de uno mismo, sino sentirse responsable con y entre los otros.

Inclusión como autonomía, como igualdad, como reconocimiento de la diversidad

No creo que nadie pueda ir por el mundo dando certificados de inclusión o de exclusión. Como hemos ido sugiriendo, no hay situaciones permanentes y estables en que una persona esté incluida o excluida. Con estos conceptos nos referimos más bien a situaciones personales que acumulan más o menos riesgos, más o menos vulnerabilidades, y que por tanto expresan un continuum en el que es posible identificar las situaciones concretas y no abstractas o formalizadas de cada uno de

nosotros, con sus blancos, negros y toda la gama de grises. Cada uno desarrolla estrategias para salir de donde está, para mejorar su situación, para evitar un exceso de precariedad o de riesgo. Desde nuestro punto de vista, y pensando en el colectivo heterogéneo de los jóvenes, se podrían destacar tres ejes: el trabajo, las redes sociales y familiares de apoyo, la capacidad de estar implicado en el entorno social, de ser reconocido como lo que cada uno es, con sus características diferenciales y específicas.

Uno es igual cuando, siendo distinto, se siente reconocido como un igual. La inclusión social de cualquier persona o colectivo pasa pues, en primer lugar, por el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales correspondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la esfera política. Este acceso es especialmente problemático para algunos colectivos, como la población extranjera, sobre la que no solamente pesa la barrera a la participación económica regular en el mercado formal (que depende directamente de tener o no tener permisos de residencia y trabajo), sino también la negación del pleno derecho al sufragio activo y pasivo. Y los jóvenes son asimismo un colectivo especialmente vulnerable, sea por evidentes razones de exclusión mayoritaria del mercado de trabajo, sea por las carencias formativas o por la falta de perspectiva que sobrevuela su realidad actual. Sin embargo, y al margen de estos casos, especialmente graves, existen un sinfín de grupos y colectivos sociales que no tienen reconocidos sus derechos sociales o que, aun teniéndolos, los recursos a los que éstos les permiten acceder resultan inadecuados a sus características u opciones personales. Nos referimos, por ejemplo, al caso de las personas con discapacidades, con enfermedades mentales, con adicciones diversas, o con pasado penitenciario. En estos casos, el acceso a las políticas sociales debería estar pensado atendiendo esa especificidad.

En segundo lugar, la inclusión social de toda persona o grupo social pasa por la conexión y solidez de las redes de reciprocidad social, ya sean éstas de carácter afectivo, familiar, vecinal, comunitario u de otro tipo. Las redes sociales y familiares son un elemento constituyente de las dinámicas de inclusión y exclusión social. Así, resulta importante señalar el hecho de que no sólo la falta de conexión con estas redes puede determinar en gran medida la exclusión o la inclusión social de una persona o colectivo, sino que también las características específicas y los sistemas de valores y de sentidos que éstas tengan son extremadamente relevantes. Aun así, la existencia de redes de solidaridad es un elemento clave en las estrategias que los grupos y las personas tienen a su alcance para paliar o dar solución a determinadas situaciones de carestía o de precariedad, y su inexistencia o su conflictividad puede agravar la gravedad de la situación y/o cronificarla. Este elemento es especialmente importante en los regímenes de bienestar mediterráneos como el español, donde la cobertura del sistema de protección social público es más débil, por lo que las redes familiares y sociales juegan un papel fundamental en la redistribución de recursos y en la contención de la exclusión y la pobreza grave.

Finalmente, el espacio de la producción económica y muy especialmente del mercado de trabajo es, como ya hemos repetido en estas notas, el otro gran pilar que sustenta la inclusión social. El empleo es la vía principal de obtención de ingresos para la mayor parte de la población, la base con la que se ha calculado el grado de cobertura social de la población inactiva y también una de las principales vías de producción de sentido e identidad para los sujetos. Por lo tanto, el grado y el tipo de participación en éste determinan de una forma muy clara y directa las condiciones objetivas de exclusión e inclusión social. En el contexto actual, existen múltiples segmentos de la población que o bien quedan al margen del mercado de trabajo o bien tienen una débil inserción en él. Nos encontramos en un proceso de dualización del mercado laboral, en el cual se consolida por un lado la disminución del mercado laboral primario, constituido por los puestos de trabajo relativamente estables y protegidos; y por el otro el crecimiento desorbitado del mercado laboral

secundario, que se caracteriza por una creciente precariedad, una alta rotación y la pérdida progresiva de derechos y coberturas sociales, y que está ocupado principalmente por jóvenes de baja y media cualificación, mujeres, inmigrantes extranjeros y trabajadores adultos precarizados. A todo ello hay que añadir el también creciente número de trabajadores, en especial jóvenes, que trabajan como falsos autónomos o en empleos informales, irregulares o directamente ilegales. Éstos, a la postre, obtienen menores ingresos, menor estabilidad y una cobertura más débil o inexistente por parte del sistema de pensiones y de protección social, por lo que requieren de manera muy significativa del apoyo de la familia u otras redes sociales.

Así, en términos generales, las carencias, ausencias o la posición que cada persona o grupo tenga en cada uno de estos espacios de la inclusión (o en más de uno a la vez), conllevan el desarrollo de procesos de precarización o vulnerabilidad que pueden conducir hacia situaciones de fuerte desigualdad o de exclusión social. Al contrario, quienes tengan mayores oportunidades de participar con unos determinados niveles de “calidad” en estas esferas serán los colectivos con mayores cotas de inclusión. La presencia y la posición de los distintos segmentos de población en cada una de estas dimensiones determinarán, de entrada, su nivel y tipo de inclusión social y, con ello, sus principales riesgos de exclusión. Así, por ejemplo, la posición desaventajada que en términos generales padecen las mujeres en el mercado de trabajo, las hace más vulnerables a procesos de exclusión vinculados con la falta de participación o las condiciones de precariedad bajo las que se desarrollan en el campo de lo laboral. De manera similar podríamos referirnos, como lo hemos venido haciendo, a los jóvenes, privados de las apoyaturas que históricamente consiguieron las generaciones anteriores y reducidos a posiciones de gran inestabilidad e informalidad. Por otra parte, colectivos como el de la población inmigrada, se hallen o no regularizados e independientemente de que participen en el mercado de trabajo, se encuentran amenazados en términos de inclusión social por el escasísimo reconocimiento existente de sus derechos políticos como ciudadanos.

Finalmente, el aislamiento social que pueden padecer muchas personas ancianas sin redes familiares o determinados casos como la monomarentalidad, encarnan posiciones muy frágiles, incapaces de amortiguar mediante las redes de apoyo la presencia de otros factores de exclusión o desigualdades.

El empleo es importante, pero no es lo único importante

Como hemos ido señalando, una de las formas habituales de encarar los fenómenos de exclusión es focalizar las posibles salidas en la búsqueda de empleo. La inserción a través del empleo se ha convertido en un elemento clave, y diríamos que inevitable, en la lucha contra la exclusión. Pero, sin negar que ese es y seguirá siendo un factor muy importante en el camino para reconstruir un estatus de ciudadano completo, hemos de recordar que si la exclusión tiene, como decíamos, una dimensión multifactorial y multidimensional, las formas de inserción han de ser plurales. En realidad, tenemos cada día que pasa mayores constancias de situaciones en las que, a pesar de gozar de un empleo, no puede hablarse de inserción social (los trabajadores por debajo del umbral de pobreza), y, asimismo, se dan muchísimos casos en los que una plena inserción social no viene acompañada de empleo retribuido alguno, sin que ello signifique que esa persona o personas no hagan su “trabajo”.

Mejor desde cerca

La inserción social no puede ser entendida como el acceso de personas o colectivos a una oferta preestablecida de prestaciones, empleos o recursos. En la concepción que defendemos, la inclusión se presenta como una dinámica que se apoya en las competencias de las personas. Y que se hace además en un contexto social y territorial determinado. La inserción se nutre de la activación de relaciones sociales de los afectados y de su entorno, y tiene sentido si consigue no solo dar salidas individuales a este o aquel, sino que sus objetivos son los de mejorar el bienestar social de la colectividad en general. Si hablamos de flexibilidad, de integralidad, de implicación colectiva, de comunidad y de inteligencia emocional, deberemos acudir al ámbito local para encontrar el grado de proximidad necesario para que todo ello sea posible. Y es precisamente en el ámbito local en el que es más posible introducir dinámicas de colaboración entre el poder público y la sociedad civil, que permitan aprovechar los distintos recursos de unos y otros, y generar o potenciar los lazos comunitarios, el llamado capital social, tan decisivo a la hora de asegurar dinámicas de inclusión sostenibles en el tiempo y con garantías de generar autonomía y no dependencia, aunque ello no tenga por qué implicar la difuminación de responsabilidades de los poderes públicos.

Establecer lazos, crear vínculos

Como hemos dicho ya, la lucha por la inclusión tiene mucho que ver con la creación de lazos de relación social. La labor de los profesionales dedicados al tema, de los poderes públicos y de las entidades o asociaciones que trabajan en la inclusión, ha de basarse, pensamos, en entrar en relación con la persona o el colectivo, ayudar a que se reconozca, a que reconcilie con su imagen, y trabajar con las relaciones de la persona con los demás, partiendo de los ámbitos más privados (niños, familias...), hasta los espacios públicos (vecindario, comunidad, barrio, ciudad) y las instituciones y entidades (escuelas, empresas, asociaciones, poderes públicos...). En el campo de los jóvenes, es sabido que son particularmente importantes las experiencias de interrelación que se establecen en las asociaciones, clubes, espacios de ocio posteducativo, etc., ya que es en esa esfera de los pares, donde se construyen habilidades, capacidades de empatía, de saber trabajar y relacionarse, que luego resultan esenciales en los procesos de transición vital. En efecto, la inclusión implica reconstruir su condición de actor social. Todo ello exige conocer los recursos del medio, para movilizarlos y aprovecharlos.

De esta manera, no sólo se consigue que el proceso de inclusión sea un proceso de reconstrucción de lazos y de relaciones, sino que sea también un proceso compartido, no estrictamente profesionalizado, y que además permita que el entorno social, la comunidad, reconozca los problemas que generan exclusión, convirtiendo el problema de unos pocos en un debate público que a todos concierne.

Por ello se habla de coproducción de los procesos de inclusión, en la que unos y otros asumen el riesgo de recrear lazos, de recuperar vínculos sin que sea posible, en una dinámica como la que apuntamos, anticipar demasiado planes de acción y fijar resultados de antemano, ya que de la misma manera que la exclusión ha sido debida a una multiplicidad de hechos y de situaciones, también la inclusión deberá ser objeto de una búsqueda en la acción

Ser igual es tratar de que todos lo seamos

La inclusión no puede ser concebida como una aventura personal, en la que el “combatiente” va pasando obstáculos hasta llegar a un punto predeterminado por los especialistas. Inclusión y exclusión son términos cambiantes que se van construyendo y reconstruyendo socialmente. Entendemos por tanto la inclusión como un proceso de construcción colectiva no exenta de riesgos. En ese proceso los poderes públicos deberían actuar más como garantes que como gerentes. Se busca la autonomía, no la dependencia. Se busca construir un régimen de inclusión, y ello quiere decir entender la inclusión como un proceso colectivo, en el que un grupo de gente, relacionada informal y formalmente, desde posiciones públicas y no públicas, tratan de conseguir un entorno de cohesión social para su comunidad. Ello exige activar la colaboración, generar incentivos, construir consenso. Y aceptar los riesgos. Para todo ello, las personas y los colectivos han de tener la oportunidad de participar desde el principio en el diseño y puesta en práctica de las medidas de inclusión que les afecten. Si no les queda otra alternativa (no pueden “salir”), han de poder participar (“hacerse oír”). Todo proceso de inclusión es un proyecto personal y colectivo, en el que los implicados, los profesionales encargados del acompañamiento, las instituciones implicadas en ello, y la comunidad en la que se inserta todo ello, participan, asumen riesgos y responsabilidades, y entienden el tema como un compromiso colectivo en el que todos pueden ganar y todos pueden perder.

Todos somos responsables

De todos ello, creemos especialmente oportuno acabar esta contribución dedicada a los jóvenes y a la inclusión social resaltando el criterio de la implicación social, entendido en sentido amplio como la habilitación de verdaderos espacios de actuación para la iniciativa social, el sector asociativo, las ONGs y, en la medida de lo posible, para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas con voluntad de implicarse en un espacio colectivo de lucha contra las exclusiones.

Deberíamos insistir en la visión que el espacio público es un ámbito de corresponsabilidad entre el conjunto de instituciones públicas y representativas y la sociedad. Creemos que una sociedad que cuenta con un tejido asociativo fuerte es una sociedad que genera lazos de confianza y estos permiten avanzar en una concepción de los problemas públicos (en este caso de la inclusión de los jóvenes) como algo compartido, y no únicamente de los poderes públicos. En el caso de las políticas de inclusión, este factor es, además, estratégico, ya que, como hemos repetido, no puede entenderse la inclusión sino es desde la proximidad, desde la integralidad de políticas y desde una lógica que permite y refuerce la implicación social en el proceso. De alguna manera, y para resumir, se podría decir que la implicación social debe estar en el corazón de las estrategias por una sociedad inclusiva. Todos seremos más iguales si entre todos nos lo proponemos, y exigimos nuestros derechos desde nuestras responsabilidades. Seguramente muchos jóvenes firmarían hoy una frase de este tipo: cómo ser diferente, ser como los demás y sentirte reconocido en tu individualidad.